

**MINUTA SOBRE CÓMO PROCEDER ANTE DELITOS QUE
SANCIONAN INFRACCIONES A LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN.
(Caso Oliveros del Huasco)**

**(Minuta preparada para la Senadora Yasna Provoste Campillay por
el abogado Luis Eduardo Thayer Morel)**

1. Los oliveros del Huasco son emprendedores que con esfuerzo han iniciado pequeñas producciones de muy buenos aceites de oliva quienes, después de una larga tramitación, han logrado registrar sus productos con la denominación de origen “Aceite de Oliva del Valle del Huasco”.
2. Hoy día, ellos están siendo afectados por el uso de la denominación de origen que protege y prestigia su producción. Se trata de personas y sociedades con domicilio en otras ciudades y regiones que comercializan aceite de oliva a través de internet y los promocionan mediante sitios web, utilizando envases con etiquetas que indican que sus productos provienen del valle del Huasco lo que es absolutamente falso. Además, las ventas que hacen sin otorgar boletas ni facturas.
3. Pues bien, esta situación les ha obligado a salir a defender y resguardar el prestigio y la calidad de sus productos. Y lo deben hacer a través mediante un procedimiento judicial en juicio sumario, pues no existe un procedimiento de reclamación administrativo o ante órganos del Poder Ejecutivo.

4. Las normas que regulan esta materia están contenidas en la ley de propiedad industrial. Básicamente los artículos 93, inciso segundo, 103, inciso primero y 105 ¹.
5. Ahora bien, previo al procedimiento judicial siempre es aconsejable plantear una negociación mediante el envío de una carta de “cese y desistimiento” al infractor. En ella se le pondrá en conocimiento de que estaría cometiendo un delito por lo que se le exhorta a eliminar del mercado las botellas que tengan las etiquetas que incluyanla denominación de origen y, eventualmente, pedirle una indemnización patrimonial. Más que recomendable, resulta necesario, reunir los antecedentes probatorios de la infracción y certificarlos ante notario para darles fecha cierta y custodiar y resguardar las pruebas. El objetivo de la carta es lograr que quien está infringiendo las disposiciones sobre denominación de origen cese en su conducta infractora y con ello evitar la acción legal. Además, la carta sirve como

¹ Artículo 93. Inciso segundo: Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o denominación.

Artículo 103. inciso primero: Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas.

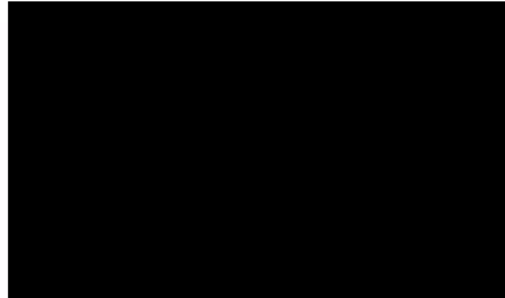
Artículo 105: Multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales por uso indebido de denominación de origen. Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios de la indicación geográfica o denominación de origen.

una especie de notificación al infractor en cuanto a que su actividad es ilegal, citándole las disposiciones que está infringiendo. De este modo, el supuesto infractor estará informado de su infracción y le será muy difícil sostener que ha actuado de buena fe en un eventual procedimiento judicial posterior. Dicha carta, teniendo la certeza que existe una efectiva infracción, podría hacerse pública. OJO: Hay que asegurarse que las aceitunas, en este caso, desde las que elabora el aceite de oliva no procedan del Valle del Huasco.

6. En todo caso si el mecanismo de negociación y el procedimiento judicial pueden ser adecuados para las grandes empresas que protegen sus marcas y creaciones, claramente no lo es para pequeños productores, atendiendo no sólo a los costos que ello les puede significar, sino al tiempo que también deben dedicar con viajes y otras actividades o medidas que eviten los perjuicios y el daño que les causa la acción de infractores inescrupulosos que se apropian de su denominación de origen.
7. En estas circunstancias resulta apropiada una reunión con el Señor Ministro de Economía -de quien depende el INAPI- con dos objetivos específicos:
 - a. Estudiar algún proyecto de ley que permita el reclamo administrativo ante organismos de la Administración Pública que pudieren ser más ágiles que las demandas judiciales y que

permitieren, a los pequeños productores que elaboran productos con denominación de origen, reclamarlos buscando la debida protección directamente ante las autoridades locales o regionales.

- b. Desarrollar programas que apoyen a los pequeños productores de aceite de oliva del Valle del Huasco mediante asistencia técnica, líneas de crédito preferentes, por ejemplo, a través de CORFO, que fortalezcan su actividad y sus pequeñas empresas y, asimismo, con la promoción de sus productos en Chile y en el extranjero.



**MINUTA SOBRE OBSERVACIONES DE CODELCO AL INFORME QUE
CONCLUYE QUE CODELCO Y SQM DEBEN EXPLOTAR EL LITIO
MEDIANTE UN CEOL**

**(Informe preparado para la senadora Yasna Provoste Campillay
por el abogado Luis Eduardo Thayer Morel)**

Después de examinar la minuta de Codelco sobre el informe que sostiene que su explotación del litio en asociación con SQM debe ser mediante un CEOL, es evidente que la interpretación de la empresa estatal reafirma la conclusión expresada por su consejera jurídica en la sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado celebrada el 19 de julio de 2024 en respuesta a la consulta formulada por la senadora Provoste al Presidente del Directorio de dicha Empresa del Estado, en orden si aquella asociación requeriría de un CEOL.

Las diferencias entre la interpretación de Codelco y la del Informe son las siguientes:

1. Respecto de la inconcesibilidad o reserva del litio al Estado.

- **Codelco sostiene** que la exigencia constitucional de un CEOL no rige respecto del litio comprendido en las pertenencias de CORFO, por ser anteriores a 1979 y haberse exceptuado expresamente dichas restricciones por la misma Constitución y la ley.

Se sustenta la excepción a la reserva del litio para el Estado en el artículo 5º letra a) del DL 2886, en la disposición transitoria segunda de la CPR y en el Código de Minería de 1983.

- **El informe sostiene** que es distinta la situación de las pertenencias constituidas por CORFO antes del 1º de enero de 1979 **de las pertenencias constituidas por particulares** antes de esa fecha.

La discrepancia está en que la CORFO es una entidad del Estado la cual, en su calidad de tal, constituyó las pertenencias y, por lo tanto, no les pudo afectar la inconcesibilidad. Esto es, su explotación, "la tiene reservada" en su calidad de órgano público y no por tratarse de una persona particular -natural o jurídica- que las hubiere constituido antes de 1979.

De este modo, sea que hayan sido incorporadas a su patrimonio, **antes o después del 01 de enero de 1979**, nunca dejaron de pertenecer al "dominio del Estado", porque **CORFO es un órgano de aquél y no es una entidad privada.**

Fue, entonces, en virtud de su naturaleza jurídica de ente estatal - **y no como un particular-** que las constituyó con el fin de administraras por mandato o decisión de la autoridad política. Luego, si ingresaron al patrimonio de CORFO en 1977, es el Estado el que siguió teniendo su dominio y su derecho a explotarlas a través de CORFO. Incluso puede darlas en "arriendo" o "cederlas" a CODELCO, porque ésta es también una empresa estatal. **CORFO y CODELCO son el Estado para estos efectos².**

Luego, mientras esas pertenencias hayan permanecido o sigan en manos CORFO o CODELCO, **no se le aplican,** obviamente, las normas sobre reserva a favor del Estado, porque, digamos, **"las tiene reservadas"** por su condición de dueño u órgano del dueño.

² Refuerza esta conclusión el hecho que solo desde la Constitución de 1980, en virtud de su artículo 19 N°21, se habilitó al Estado y sus organismos para operar sobre la base del derecho común o el derecho especial (administrativo). Luego, en 1977 cuando Corfo adquirió las pertenencias no pudo hacerlo, sino como "Estado" u órgano del Estado.

Se sustenta la inaplicabilidad de la inconcesibilidad a CORFO en el artículo 19 N° 24, inciso séptimo al décimo, de la CPR y en el DL 2886 que, **respecto a la excepción** de esta reserva de explotación del litio al Estado dispuesta en la letra a) del artículo 5, no existe otra manera de interpretarlo que no sea en función de lo expresado en el **considerando segundo del referido DL**: "*Que el interés nacional exige, en cambio, reservar para el Estado el litio, con las excepciones necesarias para resguardar debidamente **los derechos de los particulares***". (Observemos que los Códigos de Minería de 1930 y de 1932 en sus respectivos artículos 4° cuando dispusieron la reserva en favor del Estado para la explotación de diversos minerales y sustancias, hicieron salvedad respecto de ***la propiedad minera de particulares*** constituida con anterioridad a la fecha de dictación de los respectivos cuerpos legales. La misma salvedad hace la ley 6482 en su artículo 6°. Esto es, nunca las leyes hicieron tal salvedad respecto de órganos o empresas del Estado, porque evidentemente no son entes privados ni las concesiones que hayan incorporado o incorporen a sus patrimonios constituyen "***propiedad minera de particulares***").

2. Respecto de las características de la propiedad de las pertenencias incorporadas al patrimonio de CORFO.

- **Codelco sostiene** que las pertenencias de CORFO se incorporaron al patrimonio de ésta como organismo estatal que tiene personalidad jurídica propia "*por lo que ***es separado e independiente*** del patrimonio fiscal*". Agrega que la naturaleza pública de CORFO "***no supone ni implica***" que sus bienes sean fiscales en términos que su administración y disposición esté restringida o regulada por el derecho público, salvo expresa

disposición legal. Señala, además, que la administración y disposición de las pertenencias de CORFO está entregada legalmente al dueño quien debe ejercer sus facultades de acuerdo con las competencias que le han sido atribuidas por la ley. De ahí vuelve al hecho de que por tratarse de pertenencias que CORFO adquirió pre-79 **no afectó ni alcanza la inconcesibilidad y la reserva de explotación para el Estado.**

- **El informe no discute** que CORFO haya incorporado a su patrimonio propio las pertenencias pre-79. Lo que se plantea es que **no las incorporó como propiedad minera de particulares**, esto es, exceptuadas de la reserva del litio para el Estado, tal como lo dispone el DL 2886 en su artículo 5º letra a).

Ya señalamos que el considerando segundo del DL 2886 -dictado en el ejercicio de la potestad constituyente- sólo exceptúa de la inconcesibilidad del litio, expresa e inequívocamente, **"los derechos de los particulares"**. La razón es una: no podría -es evidente- haber reservado para el Estado las pertenencias de litio pre-79 que posee CORFO, porque esta Corporación es un servicio público, un órgano del Estado que, aunque descentralizado funcionalmente, todo su patrimonio propio -incluidas aquellas pertenencias- es del Estado. **CORFO no es "un particular"**. Es y ha sido siempre un órgano de la Administración del Estado.

Por otra parte, digamos, que la naturaleza jurídica de las pertenencias no tiene alteraciones en cuanto a la titularidad del dueño incluido el derecho a explotarlas. Lo que es diferente es que **la inconcesibilidad, a partir del 1º de enero de 1979, rige exclusivamente para los particulares** al igual que la excepción

a la misma dispuesta en la letra a) del artículo 5° del DL 2886. Y, por eso, nunca rigió ni ha regido para las pertenencias de CORFO pre-79.

Digamos que el destino natural de dichas pertenencias es aportarlas, por ejemplo, a la creación de la Empresa Nacional del Litio, o sea a una empresa del Estado, caso en el cual –lo mismo que si las aportara a otra empresa de igual naturaleza- su explotación no requeriría de un CEOL. El otro destino podría ser la constitución de un CEOL para llevar adelante la explotación del litio con alguna empresa privada, todo ello según el artículo 19, N° 24, inciso décimo, de la CPR.

3. Respecto de las pertenencias incorporadas al patrimonio de CORFO "no como bien fiscal".

- o **Codelco no se hizo cargo** de este punto específico y creemos que debió hacerlo, porque habría sido muy clarificador. Tampoco hemos visto que se haya referido a ello en algún instrumento. Sin embargo, en el Informe, se destacó como **un error grave de CORFO que induce o conduce al otro error**, desde el momento que sostiene que las pertenencias de CORFO pre-79 deben, en definitiva, ser tratadas igual a las constituidas por particulares antes del 1° de enero de 1979 y, por tal motivo, están exceptuadas de la inconcesibilidad, en virtud de la letra a) del artículo 5° del DL 2886.
- o **El informe expresa sobre esta materia** que lo sostenido por CORFO es **un grave error** en cuanto manifiesta que incorporó a su patrimonio propio **-pero no como bien fiscal-**, las Pertenencias Mineras OMA sobre el Salar de Atacama, porque lo hizo "**actuando**

desde una perspectiva privada, con el objeto de crear las condiciones necesarias para desarrollar un proyecto minero”.

En efecto, CORFO lo manifestó así –equivocadamente a nuestro juicio- al contestar la demanda en el juicio ante Ministro de Corte de Apelaciones de Santiago, rol N° 11-2018 ³: “*Todo lo anterior da cuenta de que las Pertenencias Mineras OMA fueron constituidas con anterioridad a la fecha en que el litio fue reservado al Estado - 1° de enero de 1979- por lo que CORFO **incorporó a su patrimonio propio -y no como bien fiscal-** tales pertenencias y los derechos mineros otorgados en conformidad con la disposiciones del Código de Minería de 1932, tanto para explotar las Pertenencias Mineras OMA y hacerse dueña de las sustancias minerales extraídas -entre ellas, el litio- como para contratar a su respecto, cediendo a terceros, en dicho caso, tal derecho de explotación*”.

Repitamos que en la misma contestación de la demanda, CORFO justificó la adquisición de las pertenencias como bien “no fiscal” afirmando lo siguiente: “*Dicho de otro modo, CORFO puede realizar actuaciones **desde una perspectiva pública**, en cuanto órgano del Estado al que le competen una o más funciones públicas y para cuyo cumplimiento se le otorga el ejercicio de ciertas potestades también públicas; y, **desde una perspectiva privada**, en cuanto persona jurídica con capacidad, patrimonio y atributos de la personalidad propios, pudiendo realizar actuaciones de derecho común patrimonial, actos que serán legales y válidos, siempre que*

³ Aunque el juicio terminó sin sentencia porque hubo abandono del procedimiento y aunque la nulidad de derecho público que se pretendía en la demanda muy difícilmente habría sido acogida, quedaron por escrito los fundamentos de las partes y, entre ellos, los de CORFO en el sentido que, erradamente, a nuestro juicio, constituyó las pertenencias desde una perspectiva privada.

*respeten las reglas y principios ordinarios del estatuto respectivo (civil, mercantil, minero, etc.). Pues bien, CORFO, al constituir las Pertenencias Mineras OMA, **actuó desde una perspectiva privada**, con el objeto de crear las condiciones necesarias para desarrollar un proyecto minero”.*

El grave error de CORFO queda, pues, de manifiesto tras estas expresiones emitidas en juicio, porque desconocen su naturaleza de servicio público y en tal calidad -como ya se dijo- todo su “patrimonio propio” no lo puede sino adquirir como órgano del Estado ⁴.

4. **Respecto de la explotación del litio mediante un CEOL.**

- ❖ **Codelco sostiene** en una de las conclusiones de su minuta que la restricción constitucional que reserva al Estado la explotación del litio **que exige** un CEOL cuando hay participación de particulares o privados, **no rige** respecto del litio comprendido en las pertenencias de CORFO por ser anteriores a 1979 y haberse exceptuado expresamente de dichas restricciones por la misma constitución y la ley.
- ❖ **El informe expresa lo contrario** y lo reafirman los antecedentes expuestos latamente en la presente minuta.
- ❖ En cualquier caso, caben las siguientes preguntas:
 - ¿Por qué Codelco opta por arriesgar la explotación del litio junto a SQM mediante una fórmula distinta a un CEOL, pese a que los

⁴ Ver nota al pie N° 1 en la página 2.

fundamentos en contrario a su decisión son jurídica y políticamente -por lo menos- fuertes?

- ¿Hay algún impedimento a que lo haga mediante un CEOL?
- ¿Podría el Presidente de la República decidir que la explotación del litio, a partir de 2031, se hiciera efectiva mediante un CEOL tal como lo indica CPR, donde él fija por decreto los requisitos y condiciones dando mucho más certeza y seguridad al cumplimiento de la Estrategia Nacional del Litio ya definida, al igual que mayor confianza al país en cuanto a la forma y la calidad de su explotación en el Salar de Atacama en los próximos 35 años?
- ¿Por qué la explotación del litio en el Salar más importante de Chile no debe -o no puede- ser explotado mediante un CEOL cuando todas las explotaciones de litio en los demás salares deberán hacerlo mediante un CEOL?

